

Presentación

Siete años después de que se iniciara la crisis, y ante síntomas cada vez más claros de que, al menos en el terreno económico, el ciclo ha cambiado, es momento de hacer un balance social de la crisis. La mayoría de analistas sociales coinciden en señalar que la población española no está saliendo incólume de estos años. La sociedad que emerge tras este período presenta perfiles novedosos en aspectos nucleares de su configuración social e institucional. La crisis ha pasado factura de modo diferenciado a distintos grupos sociales. En los últimos años diversos informes y estudios han acreditado el aumento de la pobreza y la desigualdad, cambios importantes en algunos parámetros sociodemográficos, y reajustes significativos en las estructuras de protección social. Algunos de estos efectos pueden ser transitorios, y posiblemente podrían remitir o revertirse si la recuperación económica se consolidase. Sin embargo, otros cambios tienen posiblemente un carácter estructural, abocando a nuevas configuraciones sociales de naturaleza más estable, donde puedan haber quedado sustancialmente modificados tanto los mapas de la exclusión y la vulnerabilidad social, como los mecanismos previstos (tanto privados como públicos) para asegurar condiciones básicas de bienestar en situaciones de necesidad.

El objetivo de este número de PANORAMA SOCIAL, coordinado por Pau Marí-Klose, es reunir a un conjunto de especialistas que han investigado, o participan en proyectos de investigación en curso, sobre los efectos sociales de la crisis. En el listado de expertos invitados predominan los sociólogos, pero hay también demógrafos, espe-

cialistas en salud pública, y politólogos. Desde el conocimiento de primera mano de las realidades que analizan, sus textos ofrecen un estado de la cuestión sobre los cambios acaecidos, y una evaluación del posible carácter coyuntural o presumiblemente estructural de esas transformaciones.

El primer bloque de textos explora las consecuencias de la crisis en grandes indicadores sociológicos y demográficos. El primer artículo de **Pau Marí-Klose** (Universidad de Zaragoza) y **Álvaro Martínez** (Universidad de Sheffield) analiza la evolución de los indicadores de pobreza y desigualdad, así como de los principales perfiles de la pobreza que surgen con la crisis. En su trabajo se preguntan quiénes se empobrecen, hasta qué punto lo hacen y cuáles son los principales itinerarios de empobrecimiento. La conclusión principal es que, durante la crisis, se han intensificado las tendencias al rejuvenecimiento de la privación, y que esta ha empobrecido a los sectores más precarios en el mercado de trabajo. Así, esta investigación constata que los mayores damnificados de la crisis son grupos que ocupan una posición vulnerable en relación al sistema de protección social, a los que ignora totalmente o, a lo sumo, les ofrece niveles de cobertura inadecuados. Como posible causa de esta situación se apunta a la existencia de importantes sesgos en la legitimidad que la ciudadanía concede a la conveniencia de proteger a diferentes colectivos sociales.

El segundo artículo, de **Pau Marí-Klose** (Universidad de Zaragoza), **Laura Fernández**

Martínez-Losa (Universidad de Zaragoza) y **Albert Julià Cano** (Universidad de Barcelona) explora cómo ha afectado la crisis al estado subjetivo de las personas, en función de su ubicación objetiva en esquemas de clase. Con este propósito, se examinan evolutivamente distintos indicadores extraídos de encuestas realizadas en España durante el período 2008-2014. Las clases obreras, y en particular sus segmentos más desfavorecidos, emergen como las grandes afectadas por la crisis, en correspondencia con lo que cabría esperar a la luz del deterioro significativamente más acusado de los indicadores de renta, consumo y condiciones sociolaborales en estos grupos. Sin embargo, segmentos amplios de la clase media han visto aumentar sus niveles de incertidumbre, amenaza socio-evaluativa e incluso la percepción de movilidad descendente. Las experiencias subjetivas de esa clase media que se percibe como vulnerable forman parte de muchos relatos que se han hecho, y se siguen haciendo retrospectivamente, sobre la crisis. Las clases medias han alentado y protagonizado muchas de las grandes movilizaciones y reivindicaciones acaecidas en nuestro país durante la crisis, trasladando a la arena pública sus visiones y agravios, conformando así la opinión de que esta ha sido una crisis experimentada de manera transversal, por todas las capas sociales.

El artículo de **Teresa Castro Martín, Teresa Martín García, Antonio Abellán García, Rogelio Pujol Rodríguez y Dolores Puga González** (CSIC) aporta la dimensión demográfica al balance social de la crisis. Según muestran las autoras y los autores de este texto, con la excepción de la reducción del tamaño de la población y el cambio de signo del saldo migratorio, los cambios han sido modestos. No obstante, las huellas de la crisis también se hacen visibles en el ámbito demográfico. Así, la fecundidad ha descendido, más en las zonas geográficas donde los efectos de la crisis han resultado más virulentos. La crisis también ha reforzado algunas tendencias preexistentes, como el retraso de la edad de matrimonio, particularmente en aquellas comunidades con mayor aumento de desempleo. La tasa de divorcio, en cambio, se ha estabilizado, presuntamente por la dificultad de afrontar el coste de mantener dos hogares. Aunque la esperanza de vida ha seguido aumentando, se ha incrementado notablemente la proporción de tiempo que se espera vivir en malas condiciones de salud –ya muy elevada en el caso de las mujeres–. La reducción de gasto público

durante la crisis, que ha afectado a prestaciones, productos de farmacia, tratamientos y servicios personales, ha repercutido negativamente sobre la forma en que las personas dependientes y sus familias se ven obligadas a abordar sus problemas de salud y de cronicidad.

Marga Marí-Klose y Sandra Escapa Solanas (Universidad de Barcelona) examinan precisamente el papel de la solidaridad familiar en la crisis. Las autoras discuten un relato muy propagado durante los últimos años, según el cual las abuelas y los abuelos han apoyado financieramente de manera masiva a hijos y nietos. La evidencia empírica examinada sugiere que el peso de las transferencias económicas entre padres e hijos que viven en hogares distintos es escaso, y resulta dudoso que hayan tenido una trascendencia significativa como mecanismo de protección frente a la exclusión social. Las que se dan vienen condicionadas por las necesidades de los beneficiados, pero también por las posibilidades de los donantes. Los hijos que más se benefician son aquellos cuyos padres cuentan con altos ingresos. Ante la situación generada por la crisis, las generaciones de edades más avanzadas sí parecen haber permitido que sus hijos prolonguen su estancia en el hogar parental, y en algunos casos han acogido a jóvenes que retornan a casa tras una experiencia truncada de emancipación. Esa convivencia podría haber contribuido a aliviar situaciones de privación de menores que residen con ellos, pero existe una enorme distancia entre el relato que se ha hecho sobre el papel de los abuelos y la realidad de unas ayudas relativamente limitadas.

El segundo bloque de artículos se centra en la incidencia de la crisis en aspectos sectoriales de especial relevancia para entender lo ocurrido durante los años de restricciones, privaciones y recortes. **Pedro Gallo** (Universidad de Barcelona) y **Joan Gené-Badia** (CAPSE y Universidad de Barcelona) analizan los cambios en la política sanitaria aplicados durante los años de crisis, así como su impacto sobre la salud de la población. Los autores señalan tres tipos de medidas impulsadas por un objetivo principal de contención de costes: 1) la limitación del número de personas con derecho a cobertura, mediante la exclusión de inmigrantes indocumentados y otros usuarios que no realizan contribuciones al sistema de Seguridad Social, 2) el establecimiento de nuevos y más elevados copagos para incrementar la aportación económica

de los usuarios/pacientes, y 3) la exclusión de la cobertura pública de algunos servicios y productos. Los autores perciben en la evolución de los indicadores de salud tanto claros (en indicadores de esperanza de vida, de hábito tabáquico, o en el número de muertes por accidentes de trabajo y de tráfico) como sombras (en indicadores de salud mental, salud infantil o tasas de suicidio), y apuntan a la necesidad de mostrarse cauteloso a la hora de evaluar el impacto de la crisis sobre la salud de la población en un momento que consideran todavía prematuro.

José Saturnino Martínez García (Universidad de La Laguna) analiza la interrelación entre decisiones educativas y la situación del mercado de trabajo en un contexto de crisis. El autor constata que, con la crisis, ha aumentado considerablemente el volumen de jóvenes que estudian, mientras que permanece constante (en torno a uno de cada veinte) la proporción de los que ni trabajan, ni buscan trabajo ni estudian. También se han modificado a la baja los costes de oportunidad de estudiar, debido al aumento del paro. Este “efecto paro” parece ser, de momento, mayor que lo que el autor denomina “efecto tijera”, esto es, las dificultades para continuar estudiando debido a la disminución de la capacidad de gasto de las familias y los presupuestos del Estado para promover la participación educativa. Por otra parte, durante la crisis se han acentuado las diferencias de paro entre niveles educativos como resultado de que el desempleo entre los jóvenes sin estudios se ha disparado. Al igual que ha sucedido en otras crisis anteriores, el sistema educativo ha sido constante en señalar las competencias en lectura y matemáticas de la población, pero estos niveles de competencias de poco han servido ante la masiva destrucción de empleo, ligada a una lógica estrictamente económica.

El artículo de **Alessandro Gentile** (Universidad de Zaragoza) y **Francesc Valls Fonayet** (Universidad Rovira y Virgili) aborda más específicamente la cuestión de la inestabilidad laboral en la juventud y su interrelación con dinámicas de integración social y de emancipación. Los autores describen distintas disfuncionalidades del sistema educativo y del mercado de trabajo en España que abocan a los jóvenes a situaciones de descalificación y subordinación, convirtiéndose en consecuencia en una de las principales víctimas de la crisis. Para los jóvenes, la crisis ha implicado mayores riesgos de desempleo, aumento de la subocupación, caída salarial y una agudi-

zación de los problemas por falta de protección social. Los autores señalan que la configuración disfuncional de los mercados formativo y laboral deviene en un elemento precarizador de la transición a la vida adulta para los jóvenes españoles. El retraso de la edad de emancipación, el aumento de la pobreza juvenil y el incremento del volumen de jóvenes que contemplan la opción de la emigración son las principales manifestaciones del deterioro de las condiciones de inserción laboral. A juicio de Gentile y Valls, estas manifestaciones están tensionando las estructuras de solidaridad intergeneracional que fundamentan el sistema de cohesión social en España, por lo que consideran urgente elevar los niveles de protección a los jóvenes que se incorporan al mercado de trabajo.

El artículo de **Roxana Barbulescu** (Universidad de Southampton), **Anastasia Bermúdez** (Universidad de Lieja) y **Elisa Brey** (Universidad Complutense de Madrid) estudia específicamente los perfiles socioeconómicos de las personas (mayoritariamente jóvenes) que han optado por emigrar en estos años. A través del análisis y la interpretación de fuentes secundarias, las autoras constatan que los nuevos emigrantes españoles son, en muchos casos, foráneos o nacionalizados. También destacan el peso relativo de los jóvenes con educación universitaria, pero con escasos conocimientos de idiomas y poca experiencia laboral en los sectores laborales deseados. Ambos aspectos dificultan su integración laboral en los países de destino. Su trabajo de investigación incorpora un interesante apartado cualitativo que recoge los resultados de un proyecto de investigación con “nuevos” emigrantes de nacionalidad española residentes en el Reino Unido. Los relatos de las experiencias de estos entrevistados ayudan a conocer mejor el perfil de estos emigrantes, las condiciones que les ayudaron a tomar la decisión de emigrar, y las dificultades y los retos que se encuentran a su llegada a la sociedad de acogida.

El último artículo de este bloque, escrito por **María Bruquetas Callejo** (Universidad de Ámsterdam) y **Francisco Javier Moreno Fuentes** (CSIC), está dedicado al análisis de los efectos negativos de la crisis económica sobre la población de origen inmigrante. Los autores subrayan la débil posición de este colectivo en el sistema de protección social. En un contexto de aumento generalizado del desempleo, la población de origen inmigrante se ha visto particularmente

afectada, y muchos de ellos han experimentado situaciones de desprotección social, ya sea por agotamiento de sus prestaciones contributivas, o por falta de acceso al aseguramiento, derivada de su participación en la economía informal. La población inmigrante ha sufrido asimismo el endurecimiento de las condiciones de elegibilidad a programas de último recurso, como las rentas mínimas de inserción, lo que ha condenado a muchos hogares a vivir en condiciones de pobreza extrema. A todo ello se une su marcada vulnerabilidad residencial. Un buen número de inmigrantes asumieron un considerable riesgo financiero durante la época de bonanza para acceder a viviendas en propiedad. Con la crisis, en un contexto laboral desfavorable y ante una notable erosión de sus ingresos, dicha carga financiera exacerba las situaciones de riesgo de exclusión social. Ante este panorama, los autores apuntan la posibilidad de que crezcan los riesgos de fractura social entre poblaciones autóctonas e inmigrantes. En su opinión, conviene prestar particular atención a la evolución de las actitudes negativas de la población autóctona y a la relevancia creciente que puedan adquirir los discursos acerca de la sobreutilización y el abuso de recursos públicos por parte de las poblaciones de origen inmigrante.

El tercer bloque de artículos se compone de dos trabajos dedicados al análisis de la evolución del sistema público de bienestar y las actitudes de la población hacia él. El primero, de **Eloísa del Pino** (CSIC), **Juan A. Ramos** (Universidad Rey Juan Carlos) y **Jorge Hernández** (Instituto Universitario Ortega y Gasset), describe las estrategias de consolidación fiscal desarrolladas por el Gobierno central a partir de 2010 para afrontar la crisis, y sus efectos sobre el Estado de bienestar: enfatizar la reducción del gasto, descargar en las comunidades autónomas buena parte de la responsabilidad de realizar los ajustes y permitir el deterioro (por acción u omisión) de algunas de las políticas sociales. Los autores señalan varios procesos que desencadenan estos ajustes. Así, aluden a la *remercantilización* del sistema de protección social pública, por la cual los ciudadanos dependen más ahora de los ingresos que obtengan a través de su participación (o las de sus familiares) en el mercado laboral para satisfacer sus necesidades en materia de bienestar social. En segundo lugar, detectan un proceso de *refamilización* del cuidado de niños y personas en situación de dependencia, tarea que corresponde especialmente a las mujeres, socavando

su empleabilidad y la igualdad de oportunidades. En tercer lugar, señalan que la crisis ha producido una *desuniversalización* del sistema, introduciendo nuevas lógicas que apuestan por el aseguramiento (Sistema Nacional de Salud), o la focalización de las prestaciones. *Last but not least*, a juicio de los autores han tenido lugar cambios importantes en el sistema de gobernanza, que restan protagonismo a las comunidades autónomas en beneficio del Estado central, y conceden mayor espacio a la colaboración público-privada. En el artículo se señalan algunos riesgos de deterioro de la capacidad del sistema para responder a las características de una sociedad que tiene más y mayores necesidades, y se apunta que la crisis no ha sido aprovechada para resolver, ni siquiera parcialmente, algunos de los principales problemas de fondo del sistema (la insuficiencia de ingresos, la dualización del sistema de protección social y el crecimiento de la desigualdad y la pobreza, en especial la infantil), que se posponen sin plazo.

Cierra este número 22 de PANORAMA SOCIAL **Inés Calzada** (CSIC), en cuyo artículo se analiza la evolución de la legitimidad de la intervención del Estado en las principales áreas de bienestar, a ojos de la opinión pública, durante los años de crisis. Aunque los datos evidencian que el apoyo a estos programas se ha mantenido, por lo general, en niveles relativamente altos, la autora constata también una preocupante pérdida de la confianza en la buena fe de quienes, desde el ámbito político, gestionan el sistema. Los españoles han aumentado su desconfianza hacia las instituciones políticas y, en especial, hacia los responsables de recaudar y gestionar los impuestos. Apoyándose en los argumentos del politólogo sueco Bo Rothstein, Calzada sostiene que estas orientaciones pueden poner en riesgo la sostenibilidad del Estado de bienestar en nuestro país.

En resumen, los artículos de este número de PANORAMA SOCIAL se aproximan a la realidad social de nuestro país desde diferentes perspectivas para levantar acta de lo ocurrido en el terreno social a lo largo de un período de siete años de contracción económica y consolidación fiscal. La evidencia acumulada sugiere que los efectos sociales de la crisis económica sufrida en España desde el año 2008 “van por barrios”. En algunos, el huracán que ha destrozado vidas y quebrado certidumbres se ha manifestado solo como una ligera brisa incapaz de acatarrar a nadie. En términos generales, no parece arriesgado afirmar que

la crisis ha golpeado especialmente a colectivos que ya presentaban vulnerabilidades y riesgos de exclusión, con un poderoso efecto desigualador. En el curso de estos años se ha mostrado la debilidad de algunas funciones de nuestro sistema público de bienestar, generando privaciones y malestar en segmentos significativos de la población cuando las adversidades arreciaban. En este período se han introducido, asimismo, ajustes y cambios en la orientación de ciertas políticas públicas que, si bien no han alterado sustancialmente la configuración institucional del sistema, pueden terminar erosionando las bases de legitimidad en que se sustenta. Aunque el sistema sigue gozando de considerable apoyo público, que en principio parece blindarlo frente a planteamientos e iniciativas que apuestan ya sea por su transformación radical o por su desmantelamiento, se ciernen algunas sombras sobre su sostenibilidad futura. Confiamos en que este número contribuya a alentar un debate necesario sobre estas cuestiones, y que de su lectura puedan extraerse lecciones provechosas para construir sobre nuevas bases, quizás más equitativas, la sociedad poscrisis.